



La UNI y sus afiliadas en Colombia, condenamos la violencia policial, el autoritarismo presidencial, la violación a los derechos humanos y exigimos respeto a las libertades civiles y políticas.

La condena a la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia se ha manifestado a través de las masivas movilizaciones ciudadanas que se vienen realizando desde el 21 de noviembre de 2019, con motivo del paro nacional, convocado por las centrales obreras y diferentes expresiones de la sociedad. La población salió a las calles contra los asesinatos de líderes y lideresas sociales, la política económica y laboral del gobierno de Iván Duque y la defensa de los Acuerdos de Paz.

Luego de la muerte de ciudadano Javier Ordoñez en Bogotá, en la que se encontraron comprometidos efectivos de la policía, tal como lo acreditó el video filmado por sus amigos quienes infructuosamente pidieron cesar la atroz golpiza con reiteradas descargas eléctricas de una pistola taser, que según el dictamen de medicina legal le produjo politraumatismos y la muerte al interior de la instalación policial, quedó evidenciada una vez más la brutalidad policial, los abusos y excesos cometidos contra quienes protestan legítimamente y dentro de la civilidad. Este hecho se sumó al acumulado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes de la fuerza pública y desató una ola de indignación y de descontento generalizado manifestado en marchas, protestas y movilizaciones, ante lo cual el gobierno exhibió su reiterada actitud de negar los espacios de interlocución como alternativa a las demandas de movimientos sociales y, en su lugar, instituir el autoritarismo mediante la militarización parcial de ciudades y el uso de las fuerzas militares y de policía para reprimir la manifestación pacífica, incluso con armas letales.

Este sombrío panorama evidencia que la brutalidad policial y militar contra la población civil y dirigentes sindicales y populares, los allanamientos a sedes sindicales y a organizaciones sociales, los asesinatos de líderes sociales y las masacres, 74 a la fecha, que incluye a jóvenes donde murieron 291 personas, son múltiples. Las mismas también han sido comprobadas por reconocidos organismos nacionales e internacionales como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, el cual afirmó que asesinaron 1052 líderes y defensores desde la firma del acuerdo de paz, 642 líderes sociales desde el 7 de agosto de 2018, esto es, en 2 años, y 252

personas solo en el 2020, entidades que reclaman la atención urgente gubernamental y el cese de la violencia.

Las protestas que se sucedieron, como la de la Minga indígena, cuyo objetivo era el de manifestarse por las crecientes cifras de violencia en sus territorios, el desplazamiento de sus comunidades como consecuencia del acaparamiento de tierras por parte del narcotráfico, entre otras inequidades que estas comunidades soportan; el Paro nacional del 21 de octubre, que convocó el Comité Nacional de Paro, a favor de la vida, la Paz y la democracia y por una respuesta al Pliego de Emergencia, empero solo tuvieron como respuesta gubernamental la estigmatización, el desinterés y una total negativa por parte del jefe de Estado. Quedó en el escenario nuevamente una silla vacía en la Plaza de Bolívar, la presencia de la alcaldesa de Bogotá reivindicando el respeto a la protesta pacífica y dando el reconocimiento político a los interlocutores indígenas, pero por sobre todo de mayor asentamiento de razones y argumentos para reforzar la Movilización del 19 de Noviembre de 2020.

En Colombia, el autoritarismo de tinte fascista impulsado por el partido político Centro Democrático, con su vocero el expresidente Álvaro Uribe, a través del presidente Iván Duque, es cada vez más palpable. Se ha tornado en una forma de dictadura en la que avanza la sumisión oficial de los diferentes órganos electorales y de control, lo cual implica una ruptura en el equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos en las instituciones, hostigamiento y campaña oficial para desprestigiar a las altas Cortes bajo la clandestinidad en las redes sociales, perfilamientos, seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales a los miembros de la oposición, periodistas, líderes sociales, sindicales y políticos, sabotaje al funcionamiento democrático del Congreso de la República. Incumplimiento del proceso de Paz, haciendo trizas los acuerdos pactados, militarización, represión campesina y ausencia de política social, etc., que se acentúa bajo el silencio cómplice de un gobierno que niega la protección y garantías a defensores y líderes sociales, oculta los verdaderos móviles y orígenes de los asesinatos selectivos y sistemáticos y emplea la autoridad militar para refrenar, incluso a las autoridades civiles legítimamente electas por voto popular como ocurrió en Bogotá.

La democracia, los derechos humanos, civiles y políticos, se encuentran seriamente amenazados por esta censurable conducta contrapuesta a la civilidad y la protesta social: La pandemia confirmó la desprotección del sector de la salud, la ineficacia de las políticas gubernamentales en la reducción de los niveles de contagio de COVID-19 y sus graves consecuencias en los trabajadores y trabajadoras. En su lugar, está siendo instrumentalizada para negar el derecho a la salud y la vida y como pretexto para atacar a las organizaciones sindicales y sus conquistas laborales mediante masivos despidos, reducciones arbitrarias de salarios, reforma laboral y pensional bajo Decreto presidencial y desconocimiento de garantías sindicales, atribuibles a la necesidad de la reactivación económica, sin políticas públicas y medidas sanitarias efectivas. La negociación colectiva en este nuevo contexto se estanca y, en algunos casos retrocede, motivo por el cual se requiere de la solidaridad internacional, de la unidad más extensa de la ciudadanía, la acción

firme de los liderazgos políticos, sindicales y sociales y progresistas para defender los derechos humanos, civiles y democráticos, así como la vida, la libertad sindical y la protesta, amparados por la misma Corte Constitucional, pero desacatados por el Ejecutivo para quebrantar la esperanza de un nuevo proyecto de país en el que prime una paz sostenible con justicia social, inclusión e igualdad de oportunidades para todos.

Por todo lo anterior,

- Demandamos del gobierno de Iván Duque, el cese de las amenazas, masacres, y la impunidad.
- Exigimos la reforma estructural de la policía como lo demanda multitudinariamente la ciudadanía y lo han planteado también entes de carácter internacional. Asimismo, una depuración de la fuerza pública expuesta reiteradamente a escándalos públicos de corrupción y por exceso en el uso de la fuerza contra la población, así mismo una actitud de solidaridad con los familiares de las víctimas de los asesinatos policiales y de las masacres, que implique el ofrecimiento de verdad y perdón por el comportamiento represivo utilizado por la policía y por la falta de gestión gubernamental para proteger el derecho a la vida de los líderes sociales y los derechos humanos, así como garantía de no repetición.
- Llamamos a la población a movilizarse masiva y pacíficamente el próximo 19 de noviembre, a defender el derecho a la vida y la paz, a condenar todo tipo de violencia, el asesinato, las continuas masacres, como instrumento de dominación fascista que se cierne peligrosamente sobre Colombia.
- Convocamos a los trabajadores, trabajadoras y al movimiento sindical organizado, a reivindicar sus derechos laborales y la libertad sindical, el derecho a la protesta, a exigir trabajo decente y una pensión digna, con oportunidades y cobertura para todos, en un ambiente libre de cualquier forma de violencia.
- Respaldamos e invitamos a participar en las movilizaciones y tareas de resistencia y jornadas de protestas que se adelanten con este fin.

El fascismo no pasará, la movilización civilista, democrática y popular lo derrotará.

Rechazamos la brutalidad policial, de la fuerza pública y la violación sistemática de los derechos humanos.

Exigimos reforma estructural inmediata de la policía nacional.

Respaldamos las caravanas y movilizaciones nacionales orientadas por el Comando Nacional de Paro.